

Aguascalientes, Aguascalientes; a quince de octubre del dos mil veintiuno.

SENTENCIA

V I S T O S para resolver mediante sentencia definitiva los autos del expediente *****, relativo al juicio **Ejecutivo Mercantil** promovido por *****, endosatario en procuración *****, en contra de ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, en ejercicio de la **acción cambiaria directa**, que se dicta al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.- Dispone el artículo 1324 del Código de Comercio que: "Toda sentencia debe ser fundada en ley y si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso".

Así mismo, el artículo 1327 del mismo ordenamiento legal prevé que: "La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación".

II.- Este juzgador es competente para conocer este juicio de conformidad con los artículos 1092 y 1094, fracciones I y III, del Código de Comercio, en virtud de que el accionante promovió y continuó su reclamo ante el suscrito, en tanto que la demandada no contestó la demanda, ni se inconformó en ese aspecto.

III.- Se declara procedente la vía ejecutiva mercantil, de conformidad con el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, en el que establece que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en títulos de crédito, pues en la especie, el documento base de la acción satisface los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser considerado como pagaré, mismo que tiene la naturaleza jurídica de título de crédito.

IV.- La parte actora ***** demandó a ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál por el pago de la cantidad treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, por el pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual sobre la suerte principal y por el pago de gastos y costas.

Ahora bien, la parte actora ***** sustentó su acción en el hecho de que el día veintinueve de agosto del dos mil veinte, la demandada ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, suscribió un título de crédito de los denominados pagares por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, como suerte principal obligándose al pago para el día veintinueve de noviembre del dos mil veinte, habiéndose pactado un interés moratorio del tres por ciento mensual, y que no obstante que llegaron a la fecha de vencimiento, el pagare no fue cubierto a pesar de las múltiples gestiones que se hicieron para ello.

En fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, se emplazo a la demandada ***** en su carácter de deudora principal, mediante la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual es visible a foja once de los autos, quien ante el Ministro Ejecutor manifestó que sí es su firma la que está en el pagaré, pero que no debe todo ese dinero, que firmó el pagaré en blanco, y en ese momento no contaba con dinero para pagar todo lo que dicen, que solo tenía una parte para abonar.

La demandada ***** en su carácter de deudora principal, no contestó la demanda; y por auto de fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, se le declaró en rebeldía a la demandada.

En fecha diez de agosto del dos mil veintiuno, se emplazo a la demandada ***** en su carácter de avál, mediante la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual es visible a foja treinta y cinco de los autos, quien ante el Ministro Ejecutor manifestó que sí reconoce el adeudo, porque le firmó a ***** y que sí le comentaron que estaba fallando en pagar, que sí es su firma y en ese momento no contaba con dinero pero que si quería llegar a un convenio de pago.

La demandada ***** en su carácter de avál, no contestó la demanda; y por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno, se le declaró en rebeldía a la demandada.

V.- Es procedente la acción cambiara directa en contra de las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, en la medida en que se sustenta en un documento mercantil del denominado pagaré que reúne los requisitos para ser considerado como tal en términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos de Operaciones y Crédito, toda vez que el documento indica que es un pagaré y que contiene una promesa incondicional de pago a cargo

de las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, a favor de la actora ***** , con quien se obligó hacer el pago el día veintinueve de noviembre del dos mil veinte, habiéndose pactado intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual.

Luego, este tipo de documentos debe entenderse que resultan prueba preconstituida a favor del actor, toda vez que este tipo de documento contiene en sí mismo el derecho que se ejerce.

Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“TÍTULOS EJECUTIVOS. EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, luego constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a él y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil invocada, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa codificación, es el demandado que emitió la negativa, el obligado a probar, ya que este último precepto establece que también está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor su colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que la parte demandada acredite sus excepciones o defensas, además, para que el actor destruya las excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario”. Época: Octava Época, Registro: 215748, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 596.

Así las cosas, correspondía a la parte demandada acreditar el pago o cumplimiento de las obligaciones a su cargo y no demostrar al actor el incumplimiento, pues no se le puede obligar a demostrar un hecho negativo.

Cobra también aplicación la tesis de jurisprudencia definida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que a continuación se cita:

“PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. -El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor”. Época: Octava Época, Registro: 225165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 593.

Sin embargo, como ya se dijo, la parte demandada no contestó la demanda y por ende no opuso excepciones y defensas y tampoco ofreció pruebas.

Por el contrario, fue la parte actora quien ofreció como prueba de su parte la documental privada, consistente en el documento base de la acción, que como ya se dijo tiene el carácter de prueba preconstituida a su favor y por ende acredita la existencia de la obligación y la exigibilidad de su pago.

También ofreció la parte actora como prueba la instrumental de actuaciones consistente en las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que obran a fojas once y treinta y cinco de los autos, de fechas diez de mayo del dos mil veintiuno y diez de agosto del dos mil veintiuno, donde fueron emplazadas las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, quienes ante el Ministro Ejecutor manifestó la primera que sí es su firma la que está en el pagaré, pero que no debe todo ese dinero, que firmó el pagaré en blanco, y en ese momento no contaba con dinero para pagar todo lo que dicen, que solo tenía una parte para abonar y la segunda manifestó que sí reconoce el a deudo, porque le firmó a ***** y que sí le comentaron que estaba fallando en pagar, que sí es su firma y en ese momento no contaba con dinero pero que si quería llegar a un convenio de pago.

Lo anterior, constituye una confesión de su parte, conclusión que además se encuentra sustentada en la jurisprudencia firme emitida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

“CONFESIÓN JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.-

En el juicio ejecutivo mercantil el requerimiento de pago, durante la diligencia de exequendo como primera actuación judicial, es la intimación que por virtud de un mandamiento judicial, el ejecutor del juzgado con base en las facultades y la fe pública de la que se encuentra investido, dirige a una persona para que pague el adeudo contraído o para que, en su caso, manifieste lo que estime conducente en relación con tal requerimiento; por tanto, si en dicha diligencia, a la luz de los artículos 1212 y 1235 del Código de Comercio, el demandado admite deber a la actora determinada cantidad, es una declaración que constituye una confesión, ya que se acepta la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espontánea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que el deudor es requerido del pago, tal declaración es precisamente la que implica la confesión, misma que deberá ser valorada de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos”. Época: Novena Época, Registro: 193192, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 37/99, Página: 5.

La parte actora ofreció como prueba de su parte la presuncional que este Juzgador considera que opera a favor de la parte actora, la presunción que deriva del contenido del artículo 129 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que señala: “El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega”, disposición legal aplicable al pagaré por mandato expreso del artículo 174 del mismo ordenamiento legal. De tal manera que si la parte actora tiene en su poder el documento base de la acción y reclama el pago, se presume que este no se ha efectuado.

Así las cosas, al no haber prueba que revele el pago del documento que se le reclama a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, ni haber elemento de convicción que justifique el no pago del documento, debe concluirse que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 150 fracción II de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y se declara procedente la acción cambiaria directa intentada por la parte actora *****.

Con fundamento en dicho precepto legal se condena a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, al pago del título de crédito denominado pagaré por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal a favor de la actora *****.

VI.- En cuanto a los intereses moratorios.

Debe decirse que en el documento base de la acción se pactaron intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual.

El artículo 362 del Código de Comercio, que señala: “Los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual”.

Así, a juicio de esta autoridad no hay alguna razón para realizar un control ex officio respecto de los intereses pactados en el documento base de la acción y que son del orden del tres por ciento mensual.

Lo anterior es así porque el interés moratorio pactado no excede del treinta y siete por ciento anual de intereses, que constituye el límite de lo que puede considerarse un interés no usurario.

A continuación se cita la tesis de jurisprudencia en que se sustenta tal determinación:

“INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.-

Conforme a la tesis de este órgano colegiado de rubro: "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE PERMITE SU PAGO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1735, es necesario establecer cuándo un rédito puede considerarse usurario, esto es, que transgrede los límites de lo ordinario o lícito. Así, atento a que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ni el Código de Comercio prevén un límite para el pacto de intereses en caso de mora, es válido -de acuerdo a la supletoriedad de la codificación mercantil del Código Civil Federal-

remitirnos, en primera instancia, al artículo 2395 de la indicada legislación sustantiva civil federal; sin embargo, de su lectura se advierte que prevé la reducción de los réditos, bajo la justificación en el juicio de la figura jurídica de la lesión, sin hacer referencia a intereses usurarios ni fijar un porcentaje en tal sentido. Por tanto, al tratarse la usura de un acto motivo de represión por las legislaciones penales, se destaca que el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387, fracción VIII, prevén como usura la estipulación de intereses superiores a los "usuales en el mercado"; no obstante, debe observarse que la banca presta diversidad de servicios financieros, además de que el interés varía, de acuerdo al producto, y que los porcentajes anuales que cobran las instituciones financieras por réditos son extremos, entre los más bajos y altos en su cobro; de ahí que el elemento del cuerpo del delito de fraude por usura, a que se refiere el mencionado artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal de "intereses superiores a los usuales en el mercado", se torne abstracto o impreciso para dar seguridad al gobernado de cuándo estará en condiciones de alegar que, en caso del cobro de un título y de la realización de operaciones de crédito, existe usura en el cobro de intereses moratorios. Ello es así, porque el Alto Tribunal ha sentado criterio en la tesis P. LXIX/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por tanto, atento al contenido de dicho criterio, en lo tocante a la interpretación de las normas positivas de derecho interno, se considera que una ley más acorde para la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la prohibición en ley de la usura- es la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, norma positiva que si bien no es federal, sí permite fijar un porcentaje certero y eficaz para la salvaguarda del derecho humano en comento, al disponer en su artículo 48, fracción I, que ello sucede cuando un interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por

ciento anual; de ahí que, para estar en condiciones de resolver si un rédito es usurario, es válida la remisión a dicha legislación estatal; máxime cuando las partes en la suscripción del título de crédito señalaron como lugar de pago la entidad de Aguascalientes, lo que, a la postre otorgó competencia a la responsable para conocer de la contienda en términos del artículo 1104, fracción I, de la codificación mercantil”. Época: Décima Época, Registro: 2001360, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXX.1o.3 C (10a.), Página: 1734.

De tal manera que si el documento fundatorio de la acción es demostrativo en sí mismo de los términos en que se obligó la parte demandada, por contener en su texto el derecho literal que se reclama, ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, es evidente que la parte demandada quedó obligada al pago de intereses moratorios en la medida que no resulta ser un interés usurario y porque expresamente así lo pacto.

Por ello, con fundamento en el artículo 362 del Código de Comercio, se condena a las demandada ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, al pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual, sobre la suerte principal, causados a partir del día siguiente de su vencimiento, es decir a partir del día treinta de noviembre del dos mil veinte y hasta el pago total de la suerte principal previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

Aplicárese al saldo deudor de los intereses generados del treinta de noviembre del dos mil veinte al diez de mayo del dos mil veintiuno, la cantidad de cinco mil pesos que como abono entregó la parte demandada ***** en su carácter de deudora principal, en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que tuvo verificativo en esa fecha; y en caso de existir un saldo remanente aplique al pago de capital hasta donde alcance.

VI.- En cuanto al pago de gastos y costas.

Finalmente con fundamento en lo que establece el artículo 1084 fracción III del Código de Comercio, se condena a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, al pago de gastos y costas a favor de la actora ***** , previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en dicho numeral al haber

resultado procedente la procedencia de la vía ejecutiva mercantil decretada y por haberse demostrado la procedencia de la acción cambiaria directa intentada por la parte actora quien ha obtenido sentencia favorable.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1321, 1322, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1346 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Es competente el suscrito Juez para conocer del presente juicio.

SEGUNDO.- Es procedente la Vía Ejecutiva Mercantil.

TERCERO.- La parte actora ***** acreditó la acción cambiaria directa que instó y la procedencia de las prestaciones que reclama; en tanto que las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, no contestaron la demanda ni opusieron excepciones y defensas.

CUARTO.- Se condena a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, a pagar a la parte actora ***** el pagaré por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional.

QUINTO.- Se condena a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, al pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual sobre la suerte principal a favor de la parte actora ***** , causados a partir del día treinta de noviembre del dos mil veinte, del pagaré valioso por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional.

SEXTO.- Aplíquese al saldo deudor de los intereses generados del treinta de noviembre del dos mil veinte al diez de mayo del dos mil veintiuno, la cantidad de cinco mil pesos que como abono entregó la parte demandada ***** en su carácter de deudora principal, en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que tuvo verificativo en esa fecha; y en caso de existir un saldo remanente aplique al pago de capital hasta donde alcance.

SÉPTIMO.- Se condena a las demandadas ***** en su carácter de deudora principal y ***** en su carácter de avál, al pago de gastos y costas a favor de la parte actora ***** , previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

OCTAVO.- Sáquese a remate el bien inmueble descrito en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, y con su producto hágase pago a la

actora *****, si la parte demandada ***** en su carácter de deudora principal, no diere cumplimiento voluntario a esta sentencia dentro del término de ley.

NOVENO.- Se reserva a la parte actora ***** para embargar bienes de la demandada ***** en su carácter de avál, al remate de los mismos para con su producto obtener el pago de la cantidad que se ha sentenciado en esta resolución a la parte demandada si ésta no diere cumplimiento voluntario en términos de ley con la presente sentencia.

DÉCIMO.- En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto del dos mil veinte se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese y cúmplase.

A S Í, definitivamente lo sentenció y firma el Licenciado **Juan Sergio Villalobos Cárdenas**, en su carácter de Juez Cuarto Mercantil del Estado; ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada **Laura Alejandra Plascencia Castellanos** con quien actúa.- Doy fe.-

LIC. JUAN SERGIO VILLALOBOS CÁRDENAS
JUEZ

LIC. LAURA ALEJANDRA PLASCENCIA CASTELLANOS
SECRETARIA DE ACUERDOS

La resolución que antecede se notifica a las partes del proceso por estrados del Juzgado donde se fija la Lista de Acuerdos en fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, en términos de lo que establece el artículo 1068 fracción III del Código de Comercio en vigor.- Conste.

L'JSVC/tgr

*La Licenciada **Laura Alejandra Plascencia Castellanos** Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia definitiva del expediente 0360/2021 dictada en **quince de octubre del dos mil veintiuno** por el C. Juez Cuarto de lo Mercantil, conste de **diez** fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios y demás datos generales, así como nombres o datos de identificación de personas físicas o empresas y cuya intervención fue necesaria en este procedimiento información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizárselo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.*